



INFORME AL V PLENO DEL CC

Primera parte: informe de coyuntura

I.- La deslegitimación y el intento de derrocamiento de los gobiernos de izquierdas, en la mayoría de los casos recurriendo a la violencia no solo política, no se circunscribe exclusivamente al continente Latinoamericano. Aunque ante el avance de los gobiernos progresistas en América Latina se ha intensificado la campaña de acoso y derribo de una extrema derecha que quiere ganar con la desestabilización y los golpes de Estado lo que ha perdido en las urnas.

La respuesta de las derechas y los poderes económicos servidores de sus privilegios y de los intereses de los EEUU, ha sido combatir las políticas sociales impulsadas por los gobiernos de progreso, así como oponerse a la defensa de la soberanía de sus pueblos. Estas últimas semanas hemos podido ver cómo, tras la toma de posesión de Lula en Brasil, los partidarios de Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia al más puro estilo trampista.

Esto se unió al golpe de estado contra Castillo en Perú, instalando en el poder a una presidenta y un gobierno de facto que han expulsado al embajador mexicano, prohibido la entrada en el país a Evo Morales y que mantiene al Profesor Castillo en prisión provisional acusado de rebelión, a pesar de no darse el tipo penal exigido para llevar a cabo el delito. La represión al pueblo peruano está siendo brutal. Hasta la fecha se contabilizan unas 50 personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares a consecuencia de las movilizaciones que piden la convocatoria de elecciones para 2023, así como el inicio de un proceso constituyente.

La derecha judicial y mediática continúan el lawfare, en este caso contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la que han condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en un proceso cargado de irregularidades y de falta de pruebas.

En Bolivia continúan los intentos de desestabilizar al gobierno de Luis Arce, en una operación que tiene detrás a Estados Unidos, el empresariado boliviano y el departamento de Santa Cruz como ariete. Tras treinta y seis días de paro en Santa Cruz y rumores de golpe de Estado que fueron acompañadas de asaltos y quema de locales sindicales, la derecha desconvocó la protesta, y la Fiscalía del Estado ordenó la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho por el caso "Golpe".

En Colombia la extrema derecha tampoco acepta el gobierno del Pacto Histórico y vemos como las arremetidas violentas contra el Presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, son constantes.

Europa sigue sin poner el freno a su deriva seguidista de la política exterior de Washington. La cumbre UE-OTAN del pasado 10 de enero concluyó con una declaración final conjunta en la que acuerdan reforzar su colaboración belicista. Así, tras la visita de Zelenski a Washington, Estados Unidos prepara el envío de sistemas Patriot y un nuevo paquete para Ucrania de 45.000 millones de dólares en 2023, que eleva hasta hoy la "ayuda" facilitada al gobierno de Kiev hasta un total de 110.000 millones de dólares en armamento y suministros. Al mismo tiempo, el Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de defensa nacional para el año fiscal 2023 por valor de 858.000 millones de dólares, la cifra más alta de toda la historia de la humanidad. Supone un gasto en su ejército de 2.350 millones de dólares cada día. Pese a todo, en noviembre, las diplomacias rusa y estadounidense acordaron una próxima ronda de negociaciones para abordar la prolongación o renegociación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START III, el único acuerdo nuclear entre las superpotencias que hoy está en vigor. La prolongación de la guerra en Ucrania aumenta el riesgo derivado del paulatino incremento de la implicación de la OTAN y la continuación del despliegue del dispositivo militar estadounidense en el Este de Europa. Nuestro Partido vuelve a reiterar nuestra oposición a la guerra, la necesidad de alcanzar una salida negociada al conflicto de forma inmediata y nuestra oposición a un escalamiento del conflicto y al envío de armas, motivo por el cual nos oponemos a envíos de armas por parte de nuestro país o por cualquier otro.

El XX Congreso del Partido Comunista de China confirmó el fortalecimiento del país, y sus conclusiones llaman a edificar una China socialista y moderna con el objetivo de culminar el proceso en 2049 apostando por el refuerzo de la propiedad pública, el control del sector privado, el combate a la corrupción y la importancia de preservar la justicia, la paz y la libertad, conscientes de que las tensiones con Estados Unidos tienden a aumentar. En la entrevista de Xi Jinping y Biden, en Bali, se abordó la situación en torno a Taiwán, además de la guerra ucraniana, y la colaboración de los dos países para afrontar la quiebra ecológica, la distribución de alimentos y la crisis económica mundial. Xi Jinping insistió en la necesidad de superar los enfrentamientos entre las dos superpotencias.

El pasado 13 de enero dio comienzo el XVI Congreso General del Frente Polisario. Un Congreso decisivo que contó con la asistencia de más de 2000 delegados (un 43% mujeres y un 17% de jóvenes) y más de 400 invitados internacionales. En él se determinó que el Frente Polisario seguirá apostando por la defensa armada tras la ruptura del alto el fuego en 2020 por parte del régimen marroquí, hasta conseguir la libertad del Sáhara ocupado.

Coincidiendo con la presidencia de turno de la Unión Europea que desempeñará España en el segundo semestre del año 2023, se ha convocado una cumbre de jefes de Estado de América Latina con la Unión Europea. En estos momentos un número importante de jefaturas de Estado en América Latina están desempeñadas por fuerzas y líderes de izquierdas cercanas a nuestro

espacio político y con buenas relaciones con el Partido Comunista de España, Creemos que es momento conveniente para qué lancemos una propuesta de realización de una cumbre alternativa de fuerzas políticas de izquierdas y movimientos sociales democráticos tanto de América Latina como de Europa a realizar en nuestro país y donde podamos avanzar en la coordinación de programas de actuación y en el combate a la ultraderecha. Igualmente proponemos que nuestro Partido aborde en su fiesta anual actividades en coordinación con el Partido Comunista Portugués de preparación del 50 aniversario de la revolución de los Claveles.

II.- Lo ocurrido el pasado 7 de enero en Brasilia ha sido un intento de golpe de Estado contra el Presidente Lula. Se ha repetido la misma estrategia iniciada con el golpe de Estado dado contra el presidente Evo Morales en noviembre del año 2019. Posteriormente el trumpismo también intentó un golpe similar el 6 de enero del año 2022 con el asalto del Capitolio de Washington. La estrategia parte siempre de deslegitimar los resultados electorales de un proceso democrático y acusar de falta de legitimidad al gobierno o mandatario elegido. Esta estrategia va camino de consolidarse y estando en año electoral en España, es imprescindible advertir sobre el riesgo de que la derecha ultra y la ultraderecha española intenten una operación de deslegitimación de cualquier resultado electoral que les impida acceder al gobierno de España. La derecha continua en desacato e incumplimiento de las mínimas normas de funcionamiento democrático. Estamos ante una quiebra del pacto constitucional en sus contenidos más básicos de respeto a la democracia. Para enfrentar esta situación con garantías de éxito es imprescindible conseguir la concienciación de toda la sociedad frente al riesgo para la democracia y las libertades públicas que suponen el comportamiento de la derecha ultra y la ultraderecha. Necesitamos organizar movilización social, no solamente en defensa de las reglas del juego democrático sino también para poder impulsar la agenda de transformaciones sociales que defiende nuestro Partido. Es importante no nos dejemos llevar por la falsa percepción de que el problema se ha solucionado con la renovación del Tribunal Constitucional, ya que solamente un error táctico de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial ha permitido dicha renovación y acabar por tanto con la mayoría ilegítima conservadora impuesta por la derecha judicial y política. Pero el control del CGPJ continúa estando en manos de la derecha. La renovación debería haberse producido hace ya más de cuatro años. Debemos evitar que concluya la legislatura sin haber podido renovar el Consejo del Poder Judicial, evitando que no se renueve hasta celebrarse las elecciones de diciembre del 2023, ya que entonces podría ser imposible mantener una mayoría parlamentaria de izquierdas.

III.- El año 2023 aparece repleto de compromisos electorales. Se celebrarán en mayo en toda España elecciones municipales y autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas. Este proceso electoral va a ser el paso previo para el lanzamiento del proyecto de Sumar, con lo cual es imprescindible garantizar al menos la repetición de las actuales alianzas municipales y autonómicas y a ser posible añadir más fuerzas que las que actualmente conforman el espacio de Unidas Podemos, conformando alianzas y convergencias más amplias. El Partido Comunista de España debe esforzarse en conformar amplias alianzas municipales y autonómicas y coordinar esta tarea con Izquierda Unida, a quién

debemos darle todo nuestro apoyo y ayuda. En la segunda parte de este informe desarrollamos en detalle estas cuestiones.

Consolidar las alianzas electorales en el mayor número posible de localidades y comunidades autónomas es la mejor manera de superar las reticencias de las direcciones estatales de otras fuerzas políticas respecto a la necesaria consolidación del proyecto Sumar. También es la mejor manera de facilitar la implicación y participación en la campaña electoral de todos los máximos referentes y liderazgos del actual espacio de Unidas Podemos y del proceso de Sumar.

Respecto a las elecciones generales -que se celebrarán previsiblemente a final de este año- el Partido debe trabajar para llegar a ellas con el máximo de cumplimiento del acuerdo del Gobierno de coalición y por ello es imprescindible redoblar los esfuerzos para impulsar las reformas legislativas y aprobación de nuevas normas aún pendientes, especialmente en todo lo que tiene que ver con mejora de las condiciones laborales, salariales, garantía de derechos sociales y recuperación de derechos y libertades públicas. España ahora mismo es un referente en toda Europa, mostrando que es posible abandonar las políticas neoliberales y sustituirlas por medidas que favorezcan los intereses y derechos de las mayorías trabajadoras. Somos referencia por las medidas adoptadas para garantizar derechos de la clase trabajadora, por otro tipo de políticas expansivas de los derechos económicos y sociales, por aprobar medidas de apoyo a las familias trabajadoras y a los sectores productivos más vulnerables. Siendo conscientes de que queda mucho por hacer para garantizar plenamente todos los derechos de la clase obrera y garantizar una vida digna a todas las trabajadoras y trabajadores, no perdamos de vista que las oligarquías nos combaten porque saben que estas medidas amenazan sus privilegios.

La proyección electoral de las fuerzas de la derecha supera a la intención de voto de la izquierda a pesar del muy mayoritario apoyo de toda la sociedad española, y no solamente de la clase trabajadora, a la mayoría de las medidas de escudo social y sobre energía acordadas gracias a la presencia de Unidas Podemos, de nuestro Partido y de Izquierda Unida en el gobierno. Para estas campañas electorales, hay que explicar lo que hemos hecho: una ley sobre beneficios extraordinarios de empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas; incrementó de la tributación en el IRPF a la renta de los beneficios del capital; reforma laboral y mejora de los derechos laborales de las empleadas de hogar y las y los trabajadoras de la cultura; subida del salario mínimo hasta 1000€ mensuales y 14 pagas; subidas de los salarios de los empleados y empleadas públicas y un incremento de las pensiones en un 8,5% recuperando poder adquisitivo los y las pensionistas; Gratuidad del transporte público ferroviario y reducción de tarifas de los transportes públicos; subvención de los carburantes; reducción de impuestos a productos alimenticios básicos; ayudas para alimentos para cuatro millones de familias; incremento de las becas; prohibición de cortes de suministros en hogares en situación de vulnerabilidad; tope a la subida de los arrendamientos; prórroga de los contratos de alquiler sin subida precio; topes a los precios del gas y de la electricidad. El PCE es una fuerza política útil para su clase.

Mención aparte requiere ahora mismo la situación de la sanidad pública prácticamente en todos los territorios del Estado. La competencia sobre sanidad por las comunidades autónomas se ha encontrado con múltiples supuestos de gestión y reformas legales que han posibilitado la subcontratación, las privatizaciones y externalizaciones de servicios y la falta de mecanismos para garantizar una inversión mínima que permita mantener y mejorar el nivel de funcionamiento y la calidad de la sanidad pública. Si bien las comunidades autónomas gobernadas por la derecha claramente están utilizando la gestión y privatización de la sanidad para posibilitar el enriquecimiento de elites económicas a través de iniciativas empresariales, -potenciando la sustitución de la cobertura sanitaria pública por cobertura sanitaria privada a pagar por los ciudadanos y ciudadanas- lo cierto es que es imprescindible que en todas las comunidades autónomas se establezcan unos mínimos garantizados de inversión para el mantenimiento de una sanidad calidad. Esto es imprescindible para garantizar dignamente la vida de los sectores sociales más desfavorecidos y en general de todas las clases trabajadoras. Nuestro Partido impulsa y trabaja por organizar movilizaciones sociales en defensa del sector público en general pero en especial en defensa de la calidad de la sanidad pública y debemos continuar haciéndolo. Igual ocurre respecto al derecho a la vivienda donde a pesar de las medidas adoptada sobre la regulación de los alquileres y los precios de éstos lo cierto es que a fecha de hoy ha sido imposible sacar adelante una norma que regule el derecho a la vivienda y lo garantice como un derecho esencial en toda España a la vez que son múltiples los impedimentos de importantes sectores económicos para poder intervenir los precios en el mercado y evitar que la vivienda sea una herramienta especulativa. Nuestro Partido va a seguir trabajando para conseguir estos objetivos y mientras tanto orienta a todas las organizaciones territoriales a que pongan en marcha la organización social de defensa del derecho a la vivienda como mecanismo más eficaz que nos permita alcanzar medidas concretas de disposición de un parque público de viviendas suficiente, de control de precios y de regulación del sector inmobiliario para el interés general.

Todas las medidas son combatidas por las oligarquías y los poderes económicos. Han arremetido con fuerza contra las políticas de igualdad -la Ley del “solo sí es sí”, la Ley de Ampliación del Derecho al Aborto o la Ley de Reconocimiento de Derecho para las Personas Transexuales- y contra las medidas de recuperación de derechos y libertades públicas. Contra la Ley de Memoria Democrática que ha declarado ilegal al régimen franquista y contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con una campaña liderada por los sindicatos policiales controlados por la derecha y la ultraderecha.

Para resistir los ataques y desestabilizaciones de la derecha y la ultraderecha, para continuar impulsando medidas transformadoras y que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, es imprescindible que nuestro Partido impulse la movilización social y sindical en este año, fortaleciendo la organización del conflicto social y nuestra coordinación política tanto con las organizaciones sindicales como con los movimientos sociales dispuestos a impulsar los cambios y transformaciones que necesita nuestro país. Para defender la democracia y para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Continúa pendiente un nuevo impulso a las movilizaciones sindicales para reivindicar salarios justos, lo que en este caso equivale a forzar a

que la patronal desbloquee el acuerdo de negociación colectiva, desbloqueando la actual situación que en la práctica impide la subida salarial de la inmensa mayoría de los trabajadores que trabajan en el sector privado y cobran por encima del salario mínimo interprofesional. Nuestro Partido cree que las subidas salariales son fundamentales para anular los efectos negativos de la inflación sobre el nivel y condiciones de vida de la clase trabajadora, por lo que apoyamos las propuestas -tanto para la negociación como para la movilización- efectuadas por los sindicatos para facilitar el desbloqueo de esta situación. Igualmente es imprescindible impedir el incremento de los períodos de cómputo de los años trabajados a efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación, así como impedir el incremento de la edad de jubilación defendido ahora mismo por el Ministerio de Inclusión y la mejor forma de evitarlo es organizar movilizaciones de toda la sociedad contra estas propuestas regresivas, conjuntamente con las organizaciones de pensionistas y con los sindicatos de clase. No cabe duda que de salir adelante la propuesta del Ministerio de Inclusión sería contradictoria con las medidas de mejora de las pensiones acordadas finalmente en el Pacto de Toledo que incluyen la actualización automática de las pensiones conforme al IPC anual medio, lo que ha possibilitado que este año la subida los pensionistas haya alcanzado el 8,5% de la cuantía de las pensiones.

IV.- En relación con el trabajo político a desarrollar de cara a las diferentes citas electorales que se desarrollarán a lo largo de este año, la UJCE ha hecho pública recientemente una resolución en la que anuncian que “no vamos a participar en ninguna medida de las elecciones, a pesar de que nuestro referente partidario sí lo haga” y que “la decisión de no dedicar esfuerzos a “echar una mano” en los trabajos que el Partido Comunista de España realice en torno a las elecciones no solamente nos ayudará a poder centrar nuestras fuerzas en los objetivos que creemos hoy fundamentales para avanzar hacia la reconstitución del proyecto comunista, sino que tiene como primera razón el no querer contribuir más a una dinámica política que ahonda en la postración actual de las fuerzas revolucionarias y que refuerza el régimen burgués”. Esta resolución se hace pública tras una reunión con la dirección del Partido en el que se abordaron los retos políticos del año en curso, entre ellos los del ámbito electoral, y en la que en ningún momento se nos informó de esta resolución. Dicho posicionamiento, que ha provocado que diversas organizaciones territoriales dirijan escritos al Comité Central solicitando aclaración sobre dicho punto, supone además una ruptura y falta de cohesión no solo con la política aprobada en el XXI Congreso, sino con la tradición centenaria de nuestro Partido, así como del movimiento comunista internacional del que nos sentimos parte. Es una obligación del Partido, en el marco de sus competencias, emitir una resolución en la que se exprese un posicionamiento nítido en torno al marco político de relaciones con su organización juvenil, -obligada a hacer suya la política aprobada en los Congresos del PCE para llevarla al movimiento juvenil-, y que, igualmente, establezca el marco necesario para que no se produzca un vacío en la participación de jóvenes comunistas en las tareas electorales en las que participe el PCE en los niveles locales, provinciales, autonómicos y estatal.

V.- El pasado 10 de enero, el Consejo de ministros aprobó una propuesta de reforma del Mercado Eléctrico que fija la posición de España en las discusiones que sobre este mercado se producirán en la UE.

La propuesta parte del análisis de que el mercado eléctrico actual no es efectivo en el contexto actual:

- ha establecido precios muy superiores al coste medio de producción y por lo tanto no ha garantizado precios de electricidad asequibles y estables.

- la necesidad de un mercado a largo plazo que permita la entrada de inversiones en nuevas tecnologías debido a que los mercados diarios no garantizan la recuperación de la inversión y provocan un incremento del coste de capital.

- la dificultad de garantizar el suministro de electricidad debido a que la mayor generación con energías intermitentes (eólica, fotovoltaica) necesita de mayores capacidades de generación con centrales de mayor flexibilidad de producción (ciclos combinados) y éstas necesitan altos precios para garantizar la recuperación de su inversión ya que operan un número de horas anuales inferior a su capacidad real y a las necesarias para recuperar la inversión inicial. (son llamadas "peakers").

Para subsanar estas deficiencias, el Gobierno de España propone:

- Que los operadores inframarginales reciban un precio fijo, es decir, que nucleares, hidráulicas fluyentes, eólicas y fotovoltaicas reciban un importe fijado previamente por la venta de la electricidad producida. El precio se fija mediante subastas CfD (Contrato por Diferencias), en el que los productores ofertan un precio a largo plazo que es el que reciben, si el precio del mercado diario es menor se les paga la diferencia y si es mayor tienen que pagar la diferencia.

- La simplificación de la notificación y aprobación por parte de la UE para la creación de mercados de capacidad que permitan mecanismos de remuneración a los "peakers", fundamentalmente a los ciclos combinados. Ya que actualmente dichos mercados de capacidad son considerados como un instrumento temporal de Último recurso en la UE.

Si bien la propuesta del Gobierno a la UE es un claro avance respecto al sistema existente ahora mismo de regulación del sistema eléctrico, el PCE consideramos que no es suficiente y que debemos ir más allá para abandonar definitivamente el axioma neoliberal de que el Mercado tiene capacidad de regular los elevados precios y beneficios de las grandes empresas del sector eléctrico.

El axioma de que las señales de precio son un mecanismo válido para la entrada de nuevos inversores y modificación del mix energético ya se ha mostrado falso y ha provocado precios elevados de suministro. La propuesta del Gobierno sigue insistiendo en este indicador como principal factor que condiciona las inversiones y, por lo tanto, la planificación a largo plazo del sector eléctrico.

Sin minusvalorar los avances que contiene la propuesta del Gobierno respecto a la coyuntura actual, el problema de fondo es que no existen mecanismos de intervención directa del Estado en el precio de la electricidad, en la venta de

electricidad muy por encima del coste de producción y en los altos beneficios y dividendos que están obteniendo las empresas del Oligopolio Eléctrico. El Oligopolio se ha caracterizado por su capacidad de revertir en su favor toda iniciativa del Gobierno que ha tratado de reducir el importe de las facturas de electricidad que pagamos los trabajadores y no observamos que en esta propuesta de reforma existan mecanismos para impedirlo. La propia propuesta establece la voluntariedad de los productores de incorporarse a los nuevos mecanismos con un precio fijo mientras se mantiene el mercado diario marginal sin ninguna modificación, sería un nuevo ejercicio de candidez pensar que el Oligopolio va a incorporarse voluntariamente a unos mercados que reduzcan sus beneficios. Por ello consideramos que las propuestas realizadas pueden abaratar el precio de la energía en estos momentos, pero no modificarán suficientemente la situación actual del sector eléctrico si no van seguidas de una propuesta de nuevo modelo de mercado energético. El PCE mantiene que la actual deriva del sector energético en general y su impacto negativo sobre los trabajadores, sólo puede afrontarse desde la intervención pública directa en el sector que abarque tres cuestiones básicas: fijación de precios que permitan una vida digna a los trabajadores, propiedad pública del sector y planificación pública del modelo energético.

VI.- La lucha feminista sigue siendo prioritaria para el Partido Comunista de España y también la feminización de nuestro Partido, tanto en su forma de funcionamiento como la composición de sus estructuras y en especial en la manera de relacionarse entre la militancia.

Entre las prioridades de movilización nuestra organización sitúa de manera clara el próximo 8 de marzo. Nuestras camaradas trabajan ya en los territorios para lograr que las movilizaciones sean lo más amplias posibles en todo nuestro país. Para nuestro Partido es necesario señalar que, más allá de los avances en la agenda feminista legislativa, que han sido fundamentales para la garantía de derechos como los derechos LGTBI o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es central seguir dando avances del discurso feminista, especialmente en un contexto en el que la extrema derecha, con su negacionismo de la violencia machista a la cabeza, pone en cuestión los derechos de las mujeres. El PCE está en lucha contra el feminicidio que en España se ha saldado con 99 víctimas en 2022 y 5 asesinadas en lo que llevamos de enero. El PCE al mismo tiempo que reconocemos los avances en esta lucha, somos conscientes de las deficiencias y la necesidad de más recursos para acabar con cualquier forma de violencia contra las mujeres. Además de concienciar y sensibilizar a toda la sociedad y a las instituciones es fundamental que sigamos trabajando para que ninguna mujer quede desprotegida, mejorando los mecanismos de seguridad de las mujeres así como todas las políticas de prevención, acompañamiento y reparación que son necesarias. Asumimos la iniciativa del Movimiento Democrático de Mujeres de proponer al gobierno del estado en la demanda de #DecretoLutoNacional.

Segunda parte:

El trabajo del PCE en el proceso de ampliación del espacio político/ SUMAR

Objetivos políticos:

1. Marcar línea para que la militancia comunista tenga tareas concretas en el proceso de ampliación del espacio de convergencia en el horizonte del proyecto Sumar.
2. Dotar de herramientas de trabajo que sean útiles para todos los niveles de dirección, desde el estatal hasta el local.
3. Generar alianzas políticas con las organizaciones que están llamadas a construir la candidatura de Sumar en las generales;
4. Dar a conocer a la sociedad y a las organizaciones sociales y sindicales nuestra posición política de cara a los procesos políticos y electorales de 2023.

I.- Contexto

Como ya analizamos en nuestro XXI Congreso, durante el anterior periodo y a pesar de nuestros esfuerzos, ha sido imposible consolidar Unidas Podemos como un movimiento político más allá de una alianza electoral. Ni siquiera ha sido posible consolidarlo como un espacio de convergencia de distintas fuerzas políticas.

Han sido y continúan siendo innumerables las dificultades para que se produzca una transición entre el periodo en el que la máxima referencia pública y política de todo el espacio político Unidas Podemos se ejerció por el entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el nuevo periodo que se abrió tras el abandono de responsabilidades por este y la designación de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz como nuevo y a la vez natural referente político del espacio político.

Sin duda alguna, la agenda de gobierno desplegada por los ministerios de UP ha sido determinante para impedir que la brecha de la desigualdad aumentara como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID. Las medidas del escudo social han permitido demostrar que el gobierno puede intervenir para garantizar pan, trabajo, techo y dignidad y para desplegar medidas de impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud y de las personas LGTBI, todo ello en confluencia con políticas que trabajen por la paz y por un desarrollo sustentable que preserve los ecosistemas y garantice una vida digna. Es también evidente que las actuaciones del ministerio de Trabajo -desde la permanente subida del SMI hasta la reforma laboral- están teniendo un gran impacto para mejorar la vida de nuestros y nuestras compatriotas.

Nuestro Partido es consciente de que la lucha de clases en España se sitúa hoy por una parte en la contradicción entre las fuerzas del capital y las del trabajo -visibilizada claramente en el actual enfrentamiento entre las organizaciones sindicales de clase y la patronal-, y por otra parte, entre la disputa que se

produce en el ámbito político, entre el bloque democrático y de izquierdas y el bloque de la derecha y la ultraderecha.

Estas contradicciones sociales, sindicales, políticas e institucionales van a atravesar un periodo determinante con el inicio del nuevo ciclo electoral que se inicia el próximo mes de mayo con la realización de las elecciones municipales y diversas elecciones autonómicas y que concluirá, sin duda, a final del año 2023 con la realización de nuevas elecciones generales.

En este periodo político nos jugamos los espacios de poder institucional, que junto a los espacios de poder sindical, social, ciudadano, mediático o económico, van a determinar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo para el siguiente ciclo político, y por tanto van a determinar los avances o retrocesos en derechos para la clase trabajadora y la mejora o empeoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

La izquierda transformadora y alternativa arrastra una gran debilidad para abordar este ciclo político. Concretamente nos referimos a su debilidad organizativa y sus dificultades para visibilizar una imagen consistente que muestre a un espacio político colectivo centrado en resolver los problemas de la gente, -en especial solucionando problemas de la clase trabajadora- más que eternamente ocupados en las disputas internas.

No hay justificación alguna para dilapidar ni dividir el capital político construido, con mucho esfuerzo militante, en estos últimos años entre todas las organizaciones que hemos trabajado en la construcción de un espacio político, Unidas Podemos, que ha llevado a la izquierda transformadora al gobierno de España.

De manera autocrítica debemos ser consciente de los problemas que hoy atravesamos. Unidas Podemos es probablemente la única fuerza política del mundo que está en un gobierno sin tener al menos unos órganos de coordinación conjuntos, si no unos órganos de dirección política. La Mesa Confederal de Unidas Podemos dejó de funcionar hace ya meses y en la actualidad la única coordinación del Espacio equiparable a una mínima dirección política es la que funciona en el ámbito parlamentario, concretamente la dirección del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Sin perjuicio de las reuniones puntuales de representantes de cada formación política del Espacio con el fin de abordar posicionamientos concretos que afectan a la acción política cotidiana, como ha sido el caso de los debates en torno al Consejo General del Poder Judicial, las leyes de igualdad o las reformas del Código Penal, en especial en lo que afecta a las reformas necesarias para la normalización de la situación en Cataluña.

El PCE, como Partido centenario que ha enfrentado múltiples dificultades y distintas coyunturas históricas, entre las que destacamos su participación activa en el Frente Popular de 1936, el impulso el Pacto por la Libertad, la creación de las CCOO y de la Junta Democrática al final del franquismo o la creación de Izquierda Unida, es consciente de la necesidad de dar un sentido estratégico a la política de alianzas, que sea capaz de conjugar por una parte la construcción

de una amplia Unidad Popular de las fuerzas sociales que dispute la hegemonía ideológica al pensamiento neoliberal, y por otra de alcanzar amplios acuerdos políticos y electorales capaces de frenar el avance de la derecha extrema, considera necesario en este momento hacer una reflexión sobre cómo ser capaces de avanzar tanto en la ampliación del actual espacio político de Unidas Podemos para fortalecer el espacio de la izquierda democrática alternativa y transformadora, como en la obligación de dar consistencia y estabilidad a ese proceso y su resultante.

Desde este análisis consideramos que una política de confluencia de fuerzas democráticas, en estos momentos solamente puede avanzar y consolidarse en torno a la propuesta lanzada por la compañera Yolanda Díaz y representada por el proceso denominado SUMAR.

Nuestro reto es que este proyecto nos permita articular un proceso político participativo y descentralizado, que desde la propuesta electoral y de gobierno vaya al encuentro de la ciudadanía y la clase trabajadora, conectándolo con las inquietudes y esperanzas de nuestro pueblo y organizando procesos y propuestas que levanten el ánimo y las energías de las personas demócratas y de izquierdas. Se trata de ir más allá del actual espacio político, hacer un llamamiento y conseguir insertar a toda la izquierda en el proceso, pero también vincular a mucha más gente más allá de la izquierda, demócratas que saben el riesgo actual que representa para los derechos y el Estado Social el avance de la ultraderecha, del neoliberalismo económico y de las organizaciones y discursos antidemocráticos. Construir las bases para que podamos desarrollar, en el medio y largo plazo, una nueva referencia política que, partiendo del importante trabajo hecho por las convergencias de Unidas Podemos y Sumar, nos dote de un eficaz instrumento cotidiano de trabajo.

El PCE va a estar a la altura de los retos políticos que tiene nuestro pueblo, va a poner todo su esfuerzo para garantizar que los procesos políticos y electorales de 2023 van a tener como resultado una fuerte presencia en las instituciones de la izquierda y de las fuerzas democráticas que antepongan el interés general sobre el particular y que desplieguen programas de gobierno que garanticen vidas dignas, así como frenar a las organizaciones antidemocráticas que quieren acabar con todos los derechos y libertades conquistados por la clase trabajadora.

El PCE debe desempeñar un papel activo de impulso de este proceso, actuando como fuerza referente para su desarrollo. Como hemos hecho en estos últimos años, continuaremos cubriendo las deficiencias políticas de los procesos de convergencia, impulsando la coordinación entre los actores del espacio político y contribuyendo a cohesionarlo para terminar con una situación anómala e inviable. El PCE va a cumplir con su tarea política tanto a través de Izquierda Unida como con un perfil propio que hoy nadie niega, aportando nuestro capital político a la construcción de espacios políticos de convergencia bien organizados, coordinados, estructurados y democráticos, en los que rijan una profunda participación política. En definitiva, jugar un papel organizador debido a la agudización de las contradicciones de clase y la confrontación con la extrema derecha.

II.- El estado actual de construcción de SUMAR

El proceso se ha iniciado mediante la difusión de los denominados “procesos de escucha territorial”, acompañados posteriormente de los trabajos de los denominados “grupos de elaboración”.

Se ha organizado o se organizará un “proceso de escucha” (acto) en cada comunidad autónoma salvo casos excepcionales, donde debido a importante extensión, peso demográfico o características políticas específicas, se han realizado o se realizarán varios. Cada acto que se ha realizado o se realizará en los territorios se centra en las realidades y problemáticas territoriales y sectoriales de esa región.

El PCE, junto a Izquierda Unida, ha trabajado tanto en la organización de estos actos, como en la tarea de impulsar la coordinación en cada territorio entre los distintos actores de UP y otros colectivos interesados en el proceso, para conseguir no solo el éxito de cada acto, sino el estímulo de la convergencia entre distintas fuerzas políticas y colectivos para que realmente el proceso resultante fuera una suma de actores.

Respecto a los grupos de elaboración, son casi 30. Compuestos por expertos/as o especialistas, tanto personas independientes, académicos o cuadros en la práctica vinculados a los partidos políticos o a los movimientos sociales. Los partidos del espacio Unidas Podemos, incluido el PCE, han enviado propuestas de personas expertas.

Los grupos de elaboración son otra apuesta por la participación y vinculación de personas, expertos y expertas, colectivos sectoriales, que incorporados al proyecto permiten construir propuesta de programa de gobierno. Las conclusiones de la totalidad de los grupos de elaboración deben ser útiles tanto para construir un llamamiento o propuesta de “proyecto de país”, como para aportar soluciones a problemas sociales concretos. Sin ser programa electoral, pueden utilizarse como llamamiento político cohesionador o herramienta de identificación del espacio político en procesos electorales territoriales, donde quizás demasiadas veces vamos a concurrir con distintas denominaciones.

Se trata de un modelo de proceso de elaboración que no es equiparable a los modelos de elaboración colectiva en los que hemos trabajado anteriormente, que venimos desarrollando desde hace décadas primero como Partido y después en el seno de IU. A la vista del calendario electoral de las elecciones municipales y autonómicas es conveniente que tanto el proceso de escucha territorial como el trabajo de los grupos de elaboración concluya sus tareas en diciembre o como muy tarde en enero. De esta forma tendríamos unos meses para trasladar estas conclusiones a los procesos de preparación de candidaturas y programas para las elecciones municipales y autonómicas, y sobre todo nos permitiría tanto aprovechar el resultado de esa fase del proceso SUMAR para impulsar nuestras candidaturas electorales, como para difundir sus conclusiones haciéndolas llegar a lo largo de todo el Estado. Todo ello sin perjuicio de que en los procesos de municipales y autonómicas construyamos programas electorales y propuestas de forma participativa y con un claro

contenido transformador y de ampliación de derechos, que garantice pan, trabajo, techo, dignidad y frenar las tendencias autoritarias y antidemocráticas.

III.- Los siguientes hitos del proceso. La aportación comunista

Una vez concluida la fase de escucha y el trabajo de los grupos elaboración será imprescindible poner en marcha una nueva fase de desarrollo, necesariamente con una importante participación de los partidos políticos y su militancia y de otros colectivos organizados a este proceso, lo que incluye ir avanzando en la construcción de espacios estables de toma de decisiones de forma participativa y en la extensión de quipos de coordinación.

La urgencia en dotar al proceso y a su liderazgo de una legitimidad propia, construida de forma participativa, y a la vez ir construyendo espacio organizado mas allá de los procesos de consultas, hace aconsejable realizar una fase de asamblea pública o acto de presentación de ese proyecto al país, ofreciendo propuestas, mostrando conclusiones, avanzando en la construcción de equipos de coordinación y fortaleciendo el liderazgo y la candidatura a la presidencia del Gobierno. Es decir, una fase en la que se construyan estructuras democráticas de coordinación y se dote al proceso de toda la legitimidad necesaria.

Es de vital importancia que el proceso político de Sumar consiga que en cada pueblo y ciudad, en cada barrio, haya personas que lo hagan suyo. Conseguir que la participación política se incremente y se descentralice es una premisa para conseguir un efecto multiplicador, alcanzable siempre que las organizaciones políticas y los partidos contribuyen a ello. Esa es una importante tarea del PCE. donde haya un militante comunista, un núcleo del partido, tiene que haber un motor colectivo que garantice alianzas para el fortalecimiento de Sumar. El PCE debe contribuir en este proceso a tejer alianzas, resolver contradicciones y construir síntesis superadoras en los debates. Debe impulsar la construcción de propuestas programáticas y también debe ir trabajando para garantizar la presencia de militantes comunistas en las candidaturas del nuevo ciclo electoral que viviremos en 2023.

En esa lógica, el PCE debe trabajar para insertar de forma natural el proceso de construcción de candidaturas y programas electorales municipales y autonómicos, en la hoja de ruta de construcción de SUMAR, porque para construir un proyecto de alternativa de país, hacen falta ciudades, pueblos y comunidades autónomas con gobiernos que cuiden a las familias trabajadoras, que fortalezcan la democracia y que hagan frente a las organizaciones y políticas antidemocráticas.

Es vital establecer una clara vinculación entre el proceso de Sumar y las elecciones municipales y autonómicas. Para el proyecto SUMAR es necesario que nuestras candidaturas obtengan buenos resultados electorales en las municipales y autonómicas, y que nuestros electores, en especial la clase trabajadora, perciba claramente la vinculación entre las candidaturas en las

que participemos -como Izquierda Unida, Unidas Podemos o como candidaturas de unidad municipalista- en las elecciones municipales y autonómicas y el proceso que concluirá con la candidatura de SUMAR en las elecciones generales. Nuestro reto es por tanto doble: que nuestros votantes en mayo sepan identificar nuestras candidaturas y que también sean conscientes de que votándolas dan un primer paso para fortalecer el proceso de construcción de SUMAR.

Para que la sociedad perciba esa vinculación entre las candidaturas municipales y autonómicas y el proceso de Sumar, debemos trabajar en coordinar un mismo mensaje para todos los procesos de construcción de candidaturas municipales y autonómicas, un mensaje, propuesta o idea que a la vez sirva para cohesionar lo que previsiblemente van a ser candidaturas diversas en cuanto a composición e incluso con denominaciones diferentes.

El PCE trabajará para que las formaciones políticas de izquierdas, al menos todas con las que hemos convergido en los últimos años, jueguen un papel destacado en el proyecto SUMAR. El éxito depende de que todas ellas sean la base material sobre la que se organice tanto el proyecto electoral como el proceso de ampliación del espacio político que lo sustente. La conformación de candidaturas municipales y autonómicas sólidas, consolidando las alianzas y convergencias existentes y ampliándolas, es también una forma de ir trabajando para garantizar la máxima unidad dentro de la candidatura de SUMAR para las elecciones generales. Es un trabajo que deben poner en marcha todos los núcleos comunistas y que debe iniciarse ya, Candidaturas municipales y autonómicas sólidas y amplias pueden ser un elemento disuasorio que conjure futuras rupturas en otros escenarios electorales.

No es momento de plantearse un proceso de construcción de un nuevo movimiento político en torno a Sumar. No nos planteamos por ahora más reto que el de trabajar para articular ese espacio electoral y extenderlo por todo el territorio del Estado, así como en todos los sectores sociales. Somos conscientes de que la construcción de un espacio electoral capaz de disputar en 2023 con las organizaciones neoliberales y antidemocráticas, puede ser condición de posibilidad para la construcción de un espacio político que aspire a ser algo más que una alianza electoral.

La forma jurídica de concurrencia a las elecciones necesariamente tendrá que ser la de coalición electoral, es decir tendrá que haber un acuerdo jurídico entre distintos partidos políticos para dar forma al proyecto de Sumar en las elecciones generales. Nuestro objetivo político es que exista una estructura con implantación en todo el Estado en el momento de convocarse las próximas elecciones generales.

El éxito electoral de este proyecto sin duda alguna descansará en la capacidad de unir a las distintas fuerzas políticas que actualmente participan en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, así como ampliarlo con los nuevos actores políticos y sociales susceptibles de formar parte de este proceso.

Corresponde a los partidos políticos garantizar la participación democrática de las militancias de cada fuerza política en este proyecto, así como realizar el

trabajo necesario para la estructuración y extensión del mismo, articulando mecanismos para vincular a más personas independientes. Todo ello con la vista puesta en la conformación de amplias candidaturas electorales de izquierdas para las próximas elecciones generales, acompañadas de la máxima participación social y entusiasmo político posible.

El PCE debe apostar por la conformación de esas candidaturas insertas en el proceso de construcción de Sumar, candidaturas que surjan de unas primarias conjuntas de todo el espacio con una nueva herramienta de primarias ad hoc.

Y sin duda, articular un momento de impulso público del proyecto, la realización de un amplio acto asambleario antes de acabar el verano de 2023, donde participen tanto personas a título individual como todos los partidos a la izquierda del PSOE, de ámbito estatal o nacionalistas/regionalistas progresistas, y que suponga la constitución oficial de este proyecto político.

Madrid, 21 enero 2023